



Referencia : Sentencia No. 053
Acción : Tutela
Radicado : 52-838-31-03-001-2023-00066-00
Accionante: : Luis Alberto Cuaspud Mueses
Accionadas: : Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal del Estado Civil de Mallama

Túquerres, Veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

I.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

El Juzgado, dentro del término de ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda en la presente acción de tutela, instaurada a nombre propio por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES, identificado con cédula de ciudadanía No 13.014.801 expedida en Ipiales en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, para que se le proteja sus derechos fundamentales al de elegir y ser elegido, al debido proceso, igualdad, y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrados por la Carta fundamental.

II.- SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Manifiesta el accionante, que es militante y candidato al Concejo Municipal de Piedra Ancha por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

Informa que en Colombia se llevarán a cabo las correspondientes elecciones Territoriales 2023, y que, de acuerdo con el calendario electoral, a partir del 29 de junio al 29 de julio del presente año, se encuentran abiertas y/o habilitada la inscripción de candidatos y lista de candidatos a través de la página web de la Registraduría Nación del Estado Civil.

No obstante, asevera que la lista del Concejo Municipal de Piedra Ancha se encuentra en riesgo inminente de vulneración de sus derechos fundamentales por parte de Registradora Nacional del Estado Civil, al no permitir el registro de las listas al Concejo Municipal de Mallama a través del aplicativo.

Expone que, al negar la inscripción de los militantes y candidatos ante la plataforma, deja en desigualdad a los participantes políticos frente a otros movimientos o partidos políticos.

Por lo anterior, al no existir registro de la lista al Concejo por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, en etapa electoral, alude que se encuentra desprotegido sus derechos políticos legales y constitucionales.

Manifiesta que el Representante legal del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, es el señor Camilo Ernesto Rodríguez Quispe, siendo de conocimiento del CNE, y de la Registraduría Nacional.

Afirma que el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO está limitado al ejercicio de sus funciones en la entrega e inscripción de avales ante la Registraduría Nacional.

Ahora en lo que concierne al aval, manifiestan que de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano constituye uno de los requisitos que existen para que los ciudadanos puedan presentarse como candidatos para cargos de elección popular por una colectividad política con personería jurídica, procedimiento que es llevado a cabo al interior de la colectividad y además constituye un trámite previo a la inscripción de una candidatura.

Indica que la Registraduría Nacional del Estado Civil ordenó a sus dependencias abstenerse de registrar avales del movimiento de autoridades indígena de Colombia, hasta tanto no se pronuncia el Consejo Nacional Electoral.

III.- PETICIÓN

Solicita el accionante que se ordene a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y SUS DEPENDENCIAS REGIONALES, la inscripción realizada por los candidatos a las elecciones regionales y avalados por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, a través de su representante legal, señor CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ QUISPE.

De igual forma, solicitó, se ordene al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el registro de los candidatos inscritos avalados por el representante legal el señor CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZQUISPE.

IV.- TRÁMITE IMPARTIDO

Con reparto de fecha 19 de julio de 2023, se asignó a este Despacho Judicial la presente acción constitucional, donde, con providencia de fecha 21 del mismo mes y año, se dispuso admitir el trámite en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA y para tal efecto se les concedió el término de dos (2) días, con el fin de que presenten un informe respecto a los hechos que motivaron la acción de tutela.

Posteriormente con auto de fecha 26 de julio de 2023, se ordenó vincular al MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO Y AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, y para tal efecto se les concedió el término de 24 horas, con el fin de que presenten un informe respecto a los hechos que motivaron la acción de tutela.

Y de igual forma en la mentada providencia se requirió a la parte actora a fin de que remita con destino a este proceso, documento que acredite el aval otorgado por el representante legal del partido o movimiento político AICO para su candidatura al Consejo Municipal de Mallama – Nariño, y además informe si durante el curso de este trámite constitucional, ha realizado la inscripción de su candidatura.

2. CONTESTACIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS

• REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la presente acción constitucional, en los siguientes términos:

Señala que su entidad ha dado cabal cumplimiento a sus funciones constitucionales y legales de dirigir y organizar el proceso electoral, para las elecciones de autoridades territoriales, que se realizarán el 29 de octubre de 2023.

En efecto ha ofrecido garantías a los candidatos y las agrupaciones políticas en observancia al derecho constitucional de participación política, permitiendo, sin impedimento alguno, el acceso por parte de las agrupaciones políticas a la plataforma de inscripción de candidaturas dispuesta para dicho trámite.

Informa que la inscripción de candidaturas corresponde a una de las etapas de preparación y organización de los debates electorales, la cual ésta a cargo de su entidad, y para tal fin, de cara a cada proceso, expide el acto administrativo que contiene el calendario electoral, que para el caso concreto es la Resolución No. 28229 del 2022 *“Por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de*

autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales) que se realizara el 29 de octubre de 2023."

De tal forma se estableció que el periodo de inscripción de candidaturas se adelantará del 29 de junio al 29 de julio de 2023, como lo establece el artículo 30 de la ley 1475 de 2011, y el periodo de modificación de estas, será del 31 de julio al 4 de agosto de 2023, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

La inscripción de candidaturas implica una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento, algunos de carácter general que deben atender todos los candidatos y listas de candidatos inscritas por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Así mismo, se deben cumplir unos requisitos específicos para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica dentro de los cuales se encuentra el aval (artículo 9 de la Ley 130 de 1994), otorgado por el representante legal o por quién él delegue de manera expresa.

A su vez, la Ley 1475 de 2011 en su artículo 32, dispone:

"ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. *La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente."*

De acuerdo con la norma citada, es claro que en materia de inscripción de candidaturas la RNEC, tiene a su cargo la verificación de los requisitos formales, que concretamente en materia de avales se circunscribe a la revisión de verificar si dicho aval fue conferido por el representante legal del partido o quien él delegue.

La RNEC, implementó una plataforma en la que podrá realizarse la inscripción y aceptación de la candidatura de forma virtual mediante la autenticación biométrica facial o dactilar satisfactoria, de conformidad con lo establecido en la Resolución 13506 del 29 de junio de 2023 proferida por el Registrador Nacional del Estado Civil *"Por la cual se establece el procedimiento de autenticación biométrica satisfactoria como firma electrónica para la aceptación y renuncia de las candidaturas para las elecciones de autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales)"*.

Ahora bien, de acuerdo con la información remitida por parte de la Coordinadora del Grupo de Inscripción de Candidatos de la Dirección de Gestión Electoral de la RNEC, su entidad ha realizado varios requerimientos ante el Consejo Nacional Electoral frente a la información actualizada sobre el representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia "AICO", todo esto con el fin de poder realizar la verificación de quien expide los avales.

Informa que pese a las respuestas dadas por el CNE respecto de la personería jurídica de AICO, no se ha negado la inscripción y por el contrario la agrupación política continúa con el cargo de sus candidatos.

De igual forma, manifiesta que el día 07 de julio se dio respuesta a la solicitud elevada por la agrupación política mediante oficio DGE – GIC – 2771 en el cual se contestó:

"En respuesta a su solicitud citada anteriormente y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1755 de 2015, me permito informar que el usuario del Movimiento Autoridades

Indígenas de Colombia – AICO se encuentra habilitado para la inscripción de candidaturas para cargos y corporaciones según su circunscripción”.

Con base en lo referido, es del caso manifestar que la agrupación política antes mencionada, ha inscrito candidatos en los departamentos del Valle y Nariño¹.

Para sustentar lo anotado, reitera lo precisado por la Coordinación del Grupo de Inscripción de Candidatos de la Dirección de Gestión Electoral de la RNEC, frente al normal desarrollo de la inscripción del a través de la página Web por parte candidaturas de las agrupaciones políticas del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, y sobre la normalidad en la inscripción correspondiente al representante legal con 36 inscripciones.

Por lo anterior, no es de recibo los reparos del tutelante frente a que la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha impedido la inscripción de las candidaturas que persigue

Señala que, la oficina de inspección y vigilancia del CNE el 19 de julio mediante oficio CNE-S-2023-004513 remite el listado actualizado de los representantes legales de los movimientos políticos.

Con base en lo anterior, es oportuno precisar que la RNEC reconoció y garantizó los derechos de postulación al señor **Camilo Ernesto Rodríguez Quispe** identificado con cédula de ciudadanía No. 5.208.768 como representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, persona facultada y autorizada en su momento para expedir los avales a los diferentes candidatos por parte de la agrupación política con ocasión a las elecciones de autoridades territoriales a celebrar el 29 de octubre de 2023.

No obstante lo dicho, y en virtud del comunicado CNE-S-2023-004521-DVIE-700 emitido el 19 de julio de 2023 por el CNE, quien funge a partir de la fecha como representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO para todos los efectos legales, dentro de ellos, expedir los avales de los candidatos de la agrupación política, es el señor **JESÚS OMERO CUASAPUD CHASPUENGAL (E)** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.338.088 conforme lo establecido por el CNE mediante Resolución No. 5195 de 2023.

Por lo anterior, solicita **NEGAR** la presente solicitud de amparo, como quiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no ha impedido la inscripción de candidaturas a las agrupaciones con derecho para el efecto, por cuanto ha actuado con total apego al ordenamiento jurídico.

• **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

La vinculada procedió a dar contestación a la presente acción de tutela de acuerdo con lo siguiente:

Señala que, en materia de ejercicios de democracia interna para la escogencia de candidatos al interior de las colectividades políticas, con respeto al MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO, se encuentra en sus estatutos registrados ante el Consejo Nacional Electoral, donde se estableció que la escogencia de los candidatos es de procedimiento interno del partido.

¹ Carpeta 7. Documentos 1. Respuesta Registraduría Nacional, folio 6 expediente digital.

Ahora bien, el partido político AICO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA, dentro del marco de su autonomía y conforme a las reglas estatutarias tiene la facultad de entregar los avales a los miembros del partido que se postulen a los cargos de elección popular.

En consecuencia, los hechos materia de presunta vulneración que se alude no es del resorte del Consejo Nacional Electoral resolverlas, sino de las instancias que el partido político AICO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA ha previsto para tales efectos conforme a sus Estatutos.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral no está legitimado en la causa por pasiva como responsable de los hechos que refiere el amparo, sino que tal estatus estriba en las instancias previstas en las autoridades internas del Partido de acuerdo con las reglas que regulan el ejercicio de democracia interna.

Por lo anterior, argumenta su defensa en la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones del accionante.

De otra parte, no hay medio de prueba sumarial que denote que el asunto ventilado advierta que se encuentra frente a un perjuicio irremediable que amerite conceder la Tutela como mecanismo transitorio.

Por lo expuesto solicita su desvinculación al presente tramite tutelar.

- **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE ESTADO CIVIL DE MALLAMA**

La accionada pese a estar debidamente notificada, guardo silencio.

- **MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA – AICO.**

La vinculada pese a estar debidamente notificada, guardo silencio.

V.- CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. PROBLEMA JURÍDICO

En el presente asunto se formula los siguientes interrogantes:

¿En este caso resulta procedente, la acción de tutela invocada por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL para la protección de los derechos fundamentales al de elegir y ser elegido, al debido proceso, igualdad, y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político?

3. RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO

En este caso no resulta procedente, la acción de tutela invocada por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL para la protección de los derechos fundamentales al de elegir y ser elegido, al debido proceso, igualdad, y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y

control del poder político, porque pretende dejar sin efecto una decisión amparada en la autonomía reconocida a las colectividades políticas, que no corresponde a una actuación administrativa de la que se prediquen las reglas del debido proceso, tampoco se acredita que la Registraduría Nacional del Estado Civil haya impedido de alguna forma la inscripción del accionante, ni que este cuente con aval para la misma, lo cual descarta la concurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable y consecuentemente la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Para llegar a esta tesis, se hace necesario el siguiente análisis:

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El artículo 86 de la Constitución Política anuncia las características de la acción de tutela indicando que se trata de un mecanismo mediante el cual todo ciudadano en causa propia o por interpuesta persona, puede solicitar la protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos se encuentren amenazados o hayan sido quebrantados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Asimismo, señala que, bajo determinadas circunstancias, el amparo podrá intentarse contra particulares.²

El inciso tercero de la misma norma consigna una regla concreta respecto al asunto de la procedencia en el sentido formal: la tutela *“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*.

Lo anterior significa que la acción de tutela es de carácter subsidiario, por cuanto debe verificarse que el afectado no cuente con otro mecanismo judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta regla cuenta con una excepción, según la cual la tutela es procedente como mecanismo transitorio cuando se advierta la existencia de un perjuicio irremediable. En torno a esta figura, la Corte ha indicado que para que exista un perjuicio irremediable es preciso que el mismo sea cierto, inminente, grave y de urgente atención. Sintetizando, se ha dicho:

“La acción de tutela, según ha establecido en repetidas oportunidades esta Corte, fue consagrada por el Constituyente como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, que no se diseñó para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. Por este motivo, el artículo 86 de la Carta dispone que dicha acción ‘sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial’³. La jurisprudencia constitucional, por su parte, ha precisado que este mandato se debe interpretar en el sentido de que los medios alternos de defensa con que cuenta el interesado tienen que ser idóneos, estos es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso⁴. La idoneidad de los medios de defensa se debe evaluar, en el contexto particular de cada caso individual, teniendo en cuenta las circunstancias específicas que afectan al peticionario, para así determinar si realmente existen alternativas eficaces de protección que hagan improcedente la tutela.

² El artículo 86 señala en concreto lo siguiente: *“La ley establecerá los casos en lo que la acción de tutela proceda contra particulares encargados de la prestación de un servicio públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”*.

³ “En este sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1198 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1157 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-321 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), y SU-250 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)”

⁴ “Sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).”

No obstante lo anterior, el mismo Constituyente introdujo una excepción a dicha regla, en el mismo artículo 86 Superior: a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela cuando quiera que 'se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable'.

La jurisprudencia de esta Corte⁵ ha señalado que para efectos de esta disposición, únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con el caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable⁶.

Si bien los jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para efectos de respetar el carácter subsidiario del mecanismo judicial en cuestión, existen casos en que el análisis de procedibilidad de la tutela en el caso concreto se debe efectuar en forma más amplia –esto es, menos estricta-, dada la naturaleza de las persona que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se trata de los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los sujetos de especial protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza. En tales situaciones, los jueces deben estudiar las características del perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad más amplio, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”⁷.

De acuerdo con ello, deben observarse las particularidades de cada caso concreto para así poder determinar el grado de rigor con que se aplican los criterios de procedencia de la acción de tutela.

FRENTE A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR LOS ACTOS PROFERIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

Debido al carácter subsidiario de la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que cuando existen otros medios de defensa judicial para hacer valer los derechos que se estiman conculcados, debe acudir a ellos antes que promover la solicitud de amparo, pues el juez de tutela no puede arrogarse funciones que el ordenamiento jurídico ha reservado de forma específica al juez encargado de resolver cada tipo de conflicto.

Bajo esa perspectiva, se ha considerado que quien pretenda atacar el contenido de los actos proferidos por las autoridades electorales, deberá acudir a las acciones que para el efecto prevé la jurisdicción contenciosa administrativa, en especial, la acción electoral, con el fin de ventilar las razones por las cuales considera que esas decisiones vulneran sus derechos fundamentales y que, el amparo, en estos casos, por regla general no puede abrirse paso dado su carácter subsidiario.

En efecto, se ha dicho que la acción electoral resulta ser un mecanismo idóneo y eficaz tanto para controvertir los actos administrativos de trámite como el acto mismo de

⁵ “Ver, entre muchas otras, las sentencias T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-253 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-142 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).”

⁶ “Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).”

⁷ Sentencia T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.

elección, pues aunque lo que se debate es la acción ello conlleva dejar sin efectos los actos de trámite adoptados en el curso de la misma, de forma que la acción de tutela solo podría proceder frente a actos de trámite cuando la decisión de la organización electoral o sus delegadas incurren en una vía de hecho, es decir, cuando se vulnera el derecho al debido proceso administrativo de los interesados.

En punto del carácter subsidiario que comporta el trámite constitucional de la tutela, en casos como el presente, en los cuales se discuten los actos de trámite proferidos en el curso de la elección para un cargo de elección popular relacionados con el debido proceso, la Corte Constitucional en sentencia T-232 de 2014, señaló:

"[E]n este primer aspecto concluyó que la acción de nulidad electoral prevé la oportunidad de dejar sin efectos los actos de trámite, pero atacando directamente el acto definitivo y, siendo ello así, la acción de tutela conserva su carácter residual y subsidiario, pues por regla general, sería improcedente para dejar sin efectos actos de elección. Frente al segundo punto, referido la posibilidad de ejercer control sobre los actos de trámite a través de la acción de tutela, la sentencia destacó la jurisprudencia de la Corte⁸, señalando que ello es posible de manera excepcional en los siguientes eventos: "...la acción de tutela contra actos de trámite sólo procede con carácter excepcional cuando el Estado ha actuado con prescindencia de todo referente legal y ha incurrido en una vía de hecho que impide al afectado contar con las garantías mínimas del debido proceso administrativo. Así, "la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite" sólo es posible cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación y ha "sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la Constitución".⁹

En estos eventos, la acción de tutela actúa como mecanismo definitivo sobre el acto de trámite, para encauzar el procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de las garantías del debido proceso¹⁰, pero sin interferir en el sentido de la decisión definitiva que deba adoptar la Administración y sin sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad que corresponde ejercer a la jurisdicción contenciosa administrativa".¹¹

En conclusión, cuando se trata de actos de trámite debe verificarse si el mismo es abiertamente lesivo de los derechos fundamentales del actor, en tanto puede que se esté ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Cuando ello no es así, y la inconformidad se presenta con posterioridad a la elección, lo procedente no es la tutela, teniendo en cuenta que mediante la acción de nulidad electoral se puede atacar el acto definitivo de elección, siendo este el medio idóneo para tal fin, y a través del cual también se busca dejar sin efecto los actos de trámite como el de inscripción¹².

Ahora, también cabe inferir de todo lo expuesto, que cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado, toda vez que el ordenamiento legal contempla un calendario definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al derecho a ser elegido, la protección busca permitir la participación del candidato que cumpla los

⁸ Sentencia T-961 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

⁹ Sentencia T-961 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

¹⁰ Pueden verse las sentencias SU-201 y SU-202 de 1994.

¹¹ Sentencia T-418 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

¹² Sentencia T 232 de 2014

requisitos señalados por la ley para postularse y que, en caso de llegar a ser elegido, se le permita cumplir el periodo para el cual fue elegido, salvo cuando por vía judicial la misma ha sido declarada nula o el mandato sea revocado en los términos de la Constitución¹³.

ALCANCE DEL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS.

Frente al tema, la Honorable Corte Constitucional, señaló lo siguiente

“ (...)

En el ámbito de participación política, la Corte resaltó que aun cuando las comunidades indígenas gozan de autonomía respecto de tales procesos al interior de sus territorios, se encuentran sujetos, al igual que todos los ciudadanos, a las reglas establecidas por el legislador para el debate electoral, pues tienen relación directa con la forma en que estos acuden a la conformación del poder público del Estado. Bajo esta premisa, ha señalado también que los movimientos políticos en representación de las comunidades indígenas pueden hacer uso de los mecanismos previstos por el legislador para la defensa del derecho a elegir y ser elegido con ocasión del proceso electoral. Para la Corte, tal facultad constituye “una garantía para dichas comunidades y representa a la vez el deber de asumir las responsabilidades inherentes a los derechos de participación que les han sido reconocidos (...)”.¹⁴

5. CASO CONCRETO

En el presente caso, el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES, identificado con cédula de ciudadanía No 13.014.801 expedida en Ipiales, actuando en nombre propio, solicitó se le ampare sus derechos fundamentales al de elegir y ser elegido, al debido proceso, igualdad, y al derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que han sido presuntamente vulnerados por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en tanto asegura que las accionadas han impedido el registro a través del aplicativo web, de su candidatura del Consejo Municipal del Municipio de Mallama – Piedrancha avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, a través de su representante legal señor CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ QUISPE.

En este punto debemos memorar que la Ley Estatutaria 1475 de 2011, “*por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones*”, en sus artículos 28 y ss, regula lo relativo a la inscripción de candidatos, periodos de inscripción, modificación de las inscripciones y su aceptación o rechazo.

Así, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 señala que “*los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad*” y que su selección debe obedecer a criterio democráticos.

Dentro de los requisitos señalados, el inciso primero del artículo 9 de la Ley 130 de 1994, señala lo siguiente:

¹³ Sentencia T 232 de 2014

¹⁴ Sentencia T-737 de 2005

“ARTICULO 9. Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. (...)

En cuanto al periodo de inscripción el artículo 30 ibídem, prevé que “el periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación” y, el artículo 31, al regular su modificación, dispone que “ la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones”.

A su turno, el artículo 32 establece la aceptación y rechazo de la inscripción de los candidatos a cargos de elección popular, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.

Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley. En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera”.

En el sub judice, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil, profirió la Resolución No. 28229 del 2022 “Por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales) que se realizarán el 29 de octubre de 2023.”¹⁵

De tal forma se estableció que el periodo de inscripción de candidaturas se adelantará del 29 de junio al 29 de julio de 2023, como lo establece el artículo 30 de la ley 1475 de 2011, y el periodo de modificación de estas, será del 31 de julio al 4 de agosto de 2023, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

Ahora debemos considerar que, en este caso, la acción de tutela se interpuso el día 19 de julio de 2023, y las inscripciones para candidatos iniciaron el 29 de junio de 2023 y finalizarán el día 29 de julio del presente año. Así las cosas, la única conclusión posible es que en tanto no ha finalizado el periodo de inscripciones de los candidatos, no se ha configurado un perjuicio irremediable.

Ahora bien, se encuentra acreditada la existencia de 36 inscripciones de candidatos por parte del MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO, las cuales se encuentran remitidas a los funcionarios electorales para aprobación, lo cual se concluye

¹⁵ <https://www.registraduria.gov.co/Resolucion-28229-del-14-de-octubre-2022.html>

de la prueba documental aportada por la entidad accionada. Por tal razón se concluye que no existe un perjuicio irremediable consumado ni tampoco riesgo de que este se produzca, en tanto se descarta que se haya impedido la inscripción de los candidatos avalados por el MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO, tal como se expuso en los hechos de la demanda de tutela. Así pues, al no existir un perjuicio irremediable, la acción de tutela resulta improcedente.

Con respecto al derecho a la participación política en su manifestación de elegir y ser elegido, se ha de resaltar que la intervención del juez constitucional solo se justifica cuando a favor del accionante ha surgido de manera clara el derecho fundamental en comento y su pretensión no consiste en la concreción de una mera expectativa¹⁶.

En el presente asunto se discute la vulneración de derechos surgida de **una mera expectativa** respecto a la inscripción de la candidatura del actor al Consejo Municipal de Mallama, avalado, de acuerdo a lo manifestado por él, por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, a través de su representante legal señor CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ QUISPE.

Ahora bien, es del caso advertir que en virtud del comunicado CNE-S-2023-004521-DVIE-700 emitido el 19 de julio de 2023 por el CNE, quien funge como representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, es el señor JESÚS OMERO CUASAPUD CHASPUENGAL (E) identificado con cédula de ciudadanía No. 98.338.088, conforme lo establecido por el CNE mediante Resolución No. 5195 de 2023, razón por la cual, es el citado, el facultado para otorgar el aval a los militantes del del MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO, en atención a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 130 de 1994.

Así las cosas, se advierte que al parecer existe un cambio de representante legal en el partido político que determina la facultad de otorgamiento del aval a las candidaturas correspondientes y consecuentemente la posibilidad de inscripción de las mismas. Siendo esta una determinación exclusiva del mismo movimiento político indígena dentro de su autonomía.

Debemos tener presente que, si el otorgamiento del aval político tiene por finalidad garantizar la idoneidad moral del candidato¹⁷ en un acto de responsabilidad política que garantiza el ejercicio democrático del proceso electoral, para fortalecer el régimen de los partidos políticos, esta especial facultad es inherente a la autonomía que la Constitución Política reconoce a los partidos políticos, de modo que concede a ellos la posibilidad de regular estatutariamente los mecanismos, controles y procedimientos para su debido funcionamiento.

Por lo tanto, la intromisión del juez de tutela resulta contraria a la autonomía constitucionalmente otorgada a las colectividades políticas, porque sus atribuciones y decisiones están amparadas bajo su discrecionalidad, pues es a la colectividad política en el marco de la dinámica de la democracia, a quien le corresponde evaluar sobre el otorgamiento o la revocatoria de un aval.

En cuanto al debido proceso que se aduce como vulnerado, en precedencia se han detallado las particulares características de esta atribución, su legitimación en cabeza del partido y la responsabilidad política que surge para la colectividad política y el candidato, la naturaleza especial del aval como parte del acto preparatorio de la inscripción electoral, razones suficientes para concluir que no es dable predicar las reglas

¹⁶ Sentencia T-1005/06.

¹⁷ Se ha de tener en cuenta que con respecto de las reservas personales que puedan albergar los entes nominadores se ha considerado que se trata de “circunstancia que escapa por completo al análisis del juez de tutela” (Sentencia T-1190/04).

del debido proceso a una actuación que ni es pública, tampoco asimilable a las reglas del proceso administrativo, ni requiere ser motivada.

Por otra parte, no se encuentra acreditado que la Registraduría haya impedido de alguna forma la inscripción del accionante como candidato, ya que incluso se probó que otros aspirantes avalados por el mismo movimiento político ya se encuentran inscritos, lo cual descarta en tal actuación la vulneración al debido proceso.

Por el contrario, obligar a las accionadas a inscribir a un candidato para las elecciones, si implicaría violar el procedimiento legal¹⁸, máxime cuando en la presente actuación no se ha acreditado, que en efecto, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO haya otorgado su aval al accionante, a pesar de haberse requerido tanto al accionante como a dicho partido político, sin que se diera respuesta alguna.

Así, pues, la presente acción de tutela deviene en improcedente porque pretende dejar sin efecto una decisión amparada en la autonomía reconocida a las colectividades políticas, que no corresponde a una actuación administrativa de la que se prediquen las reglas del debido proceso, tampoco se acredita que la Registraduría Nacional del Estado Civil haya impedido de alguna forma la inscripción del accionante, ni que este cuente con aval para la misma, lo cual descarta la concurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable y consecuentemente la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la demanda de tutela.

V.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE TÚQUERRES**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

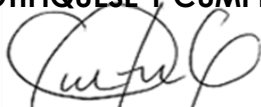
PRIMERO: DECLARAR improcedente, la acción de tutela invocada por el señor LUIS ALBERTO CUASPUD MUESES, identificado con cédula de ciudadanía No 13.014.801 en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MALLAMA Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Súrtanse las comunicaciones a las partes, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, esto es, de forma expedita.

TERCERO: ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, publicar de manera inmediata la presente decisión en su página web institucional para efectos de notificación.

CUARTO: Contra la sentencia cabe la impugnación ante el Superior. De no ser impugnada la presente decisión, remítase la presente acción de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ANA ISABEL GUEVARA ORDOÑEZ
JUEZA

¹⁸ El artículo 2° de la Ley de la 163 de 1994 establece el plazo de los 5 días posteriores a la inscripción como término para efectuar las modificaciones a la inscripción de candidaturas y la Resolución 1073 de 2007 de la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario electoral, correspondiendo el plazo de modificación entre el 9 y el 15 de septiembre de 2007.